

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 016 2015 01427 00 promovido por el señor **PEDRO PABLO ARAQUE RODRÍGUEZ** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante frente a la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2016 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **064**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Pedro Pablo Araque Rodríguez, demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de sobrevivientes

derivada del fallecimiento de su madre Otilia Rodríguez, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que el 3 de junio de 1994 sufrió un trauma hemicráneo (TEC), después de intervención quirúrgica (craneotomía) y tratamientos posteriores quedó con gran discapacidad. Su madre Otilia Rodríguez a pesar de su avanzada edad (71 años), asumió su cuidado y manutención, brindándole cariño y afecto familiar. Aduce que cuando su madre ya no pudo cuidar de él lo internó en un ancianato, donde actualmente se encuentra recluso. La señora Otilia Rodríguez fue pensionada por el ISS mediante Resolución 02756 de 13 de agosto de 1985. La citada falleció el 1° de julio de 2012. Indica que mediante dictamen le fue calificada una pérdida de capacidad laboral del 69.3%. Solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, misma que le fue negada mediante las Resoluciones 200671 de 6 de agosto de 2013, 195690 de 30 de mayo de 2014 y 84431 de 22 de marzo de 2015, argumentando que “...*el registro civil de nacimiento aportado por el solicitante, no se identifica plenamente la causante, debido que, no se observa el número de cédula...*”.

En sentencia proferida el 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones formuladas en la demanda, y condenó en costas al actor.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del demandante considera que a su representado le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes “... *porque si bien es cierto que donde estaba internado le daban la alimentación y el techo, también es cierto que todo lo demás corría precisamente a costa de su señora madre que le suministraba la ropa y muchas veces droga cuando no se la proporcionaba propiamente la entidad, y utensilios de aseo, todo esto se lo suministraba su señora madre que lo llevó allá precisamente porque ella ya era una anciana de más de 71 años y estaba enferma y no podía precisamente continuar con su hijo siniestrándole la ayuda necesaria*

como era el lavarle la ropa, inclusive ayudarlo hasta caminar porque el señor ya bregaba mucho para caminar, todo esto está probado dentro del proceso...”.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones presentó oportuno escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la providencia de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si el señor Pedro Pablo Araque Rodríguez reúne los requisitos legales, consagrados en los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, para que le sea reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su Señora madre Otilia Rodríguez, con su retroactivo pensional e intereses moratorios.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa a folios 7 a 24 del expediente. La Sala encuentra:

i) Que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por medio de la Resolución 02756 de 13 de agosto de 1985 le concedió a la señora Otilia Rodríguez, la pensión por vejez, a partir del 23 de abril de 1985 y en cuantía equivalente a \$13.558,00.

ii) Que de acuerdo al Dictamen Médico Laboral emitido por la Comisión Médico Laboral de Colpensiones el 3 de julio de 2013, el señor Pedro Pablo Araque Rodríguez padece “Hemorragia intraencefalica, no especificada”, que le genera una pérdida de capacidad laboral de origen común del 69.3%, estructurada el 3 de junio de 1994.

iii) Que la señora Otilia Rodríguez falleció el 1° de julio de 2012.

iv) Que el actor le reclamó administrativamente a Colpensiones el 29 de mayo de 2013, invocando la calidad de hijo invalido, la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su madre Otilia Rodríguez.

v) Que Colpensiones negó la prestación por medio de la Resolución GNR 200671 de 6 de agosto de 2013, aduciendo que:

“...Una vez analizada la documentación obrante en el cuaderno administrativo se pudo establecer que el registro civil de nacimiento aportado por el solicitante presenta algunas inconsistencias como, toda vez que no se identifica plenamente a la causante con el número de cedula, además de ser inscripción posterior a la muerte de la misma, motivo por el cual no es posible establecer que la persona que indican como madre del solicitante es efectivamente la pensionada por esta entidad.

Que el indicativo serial al cual remplace el nuevo registro civil de nacimiento es una inscripción previa al fallecimiento de la misma, el cual podría probar la calidad de hijo del peticionario, estableciendo una plena identificación por parte de la causante.

Que de conformidad con lo anterior y entre tanto el peticionario no pruebe la calidad de hijo de la causante no es posible acceder a la prestación solicitada...”

vi) Que el acto administrativo referido fue confirmado mediante las Resoluciones GNR 195690 de 30 de mayo de 2014 y GNR 84431 de 22 de marzo de 2015.

vii) Que los señores Otilia Rodríguez y Julio Rafael Araque contrajeron matrimonio el 16 de febrero de 1942.

viii) Que el registro civil de nacimiento del señor Pedro Pablo Araque Rodríguez generado el 7 de diciembre de 1942 indica que el mencionado accionante nació el 11 de diciembre de 1942, y es hijo de los señores Otilia Rodríguez y Julio Rafael Araque.

ix) Que el registro civil referido fue reemplazado el 19 de febrero de 2013 para efectos de corregir la fecha de inscripción.

x) Que la Fundación Opción Colombia certificó que el señor Pedro Pablo Araque Rodríguez se encuentra institucionalizado en dicha entidad desde el día 15 de abril de 2009, en el modelo de larga estancia.

DEL DERECHO PENSIONAL

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El documento que reposa a folios 18 del expediente informa que la señora Otilia Rodríguez falleció el 1º de julio de 2012, por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme al artículo 12, cuando un pensionado fallece, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros de su grupo familiar. Y según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.

El a quo para motivar su decisión precisó que la prueba testimonial da cuenta que el señor Pedro Pablo Araque Rodríguez no dependía económicamente de su madre Otilia Rodríguez, porque al momento del fallecimiento de ésta, el actor se encontraba internado en un asilo, mismo que es subsidiado por el Municipio. Que las personas que se encuentran en estas instituciones no están en la obligación de cancelar ninguna suma de dinero y que los alimentos son suministrados igualmente por el ente territorial y la salud es subsidiada, en suma, es el Estado quien se encarga de la manutención de tales personas, quienes son

ingresadas al régimen subsidiado de salud, asumiendo el Estado dicha cobertura. Que no se estableció en el proceso que el demandante haya estado como beneficiario de su madre en el sistema de salud, por el contrario, quedó claro que estuvo alejado del hogar y que solo a raíz de un accidente que tuvo volvió a casa. Que desde el 15 de abril de 2009 conforme certificación de folios 55 se encuentra internado en la Fundación Acción Colombia, la cual según los testigos es subsidiada por el Municipio. Que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han precisado que cuando se trata de la dependencia económica entre padres e hijos, aquella no debe ser total o absoluta, aclarando que dicha tesis opera cuando son los padres quienes reclaman la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de uno de sus hijos, postura sentada en las sentencias C - 111 de 2006 y T -396 de 2009. Que cuando se trata de un hijo invalido quien reclama la prestación derivada del fallecimiento de sus padres, la norma es clara en indicar que le asiste derecho si dependía económicamente del causante entendiéndose que percibiera otros ingresos o ayudas. Que en este juicio es claro que para el momento del fallecimiento de la señora Otilia Rodríguez el actor no dependía económicamente de la misma y por el contrario es beneficiario de ayudas que el Estado proporciona a personas que carecen de familia o que existiendo, se logra comprobar que no puede hacerse cargo de las necesidades económicas, físicas y de acompañamiento.

La Sala comparte este razonamiento.

En primer lugar, porque es el resultado del análisis de los medios probatorios acercados al proceso, que se enmarca dentro de las facultades que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le brinda al Juzgador de apreciar libremente las pruebas aducidas en el juicio para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos, con base en aquellas que lo persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal.

En segundo lugar, porque la Ley no define el concepto de “dependencia económica”. No obstante, respecto de la dependencia económica de los hijos en condición de discapacidad, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de

Justicia en la sentencia SL 4552 de 27 de octubre de 2020, Radicado 71.663 precisó:

“...El alcance del concepto de la dependencia económica en materia de seguridad social sobre el cual se edifica la controversia planteada, ha sido fijado por esta Sala en múltiples oportunidades, entre otras, en la sentencia CSJ SL 5605-2019 en la que se explicó:

El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo o del padre fallecido, según el caso, que no es otro que aquel, que, ante la pérdida de su familiar, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.

La dependencia parte de la necesidad de la protección del hijo en condición de discapacidad que se encuentra subordinado al ingreso que el padre le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica de éste se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de aquél, ante la imposibilidad material de costearlos para subsistir.

Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres o de los hijos de suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su subsistencia (subraya la Sala).

Así mismo, en un caso de contorno similares al presente, la Corte en la sentencia CSJ SL296-2020 estimó:

De manera que, lo que el *ad quem* debió corroborar en torno al recurso de apelación interpuesto por la accionada, si la demandante había demostrado que, al momento de fallecer su padre, este le proporcionaba un sustento económico que era necesario para su congrua subsistencia, a pesar de que ella recibía una pensión de invalidez equivalente al salario mínimo legal.

Dicho de otra manera, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia, la colegiatura debió revisar la prueba documental y testimonial que sirvió de soporte al juzgado y que era materia del recurso de alzada, a fin de verificar si la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, era de tal proporción que le impedía valerse por sí misma, aun cuando contara con recursos propios o provenientes de su pensión de invalidez (subraya la Sala)...”.

En tercer lugar, porque al proceso fueron presentados los testimonios de las señoras María Magdalena Muñoz de Rodríguez y María Herminia Parra de Piedrahita. La primera afirmó que conoce al señor Pedro Pablo Araque Rodríguez porque fueron vecinos en el Municipio de Olaya – Sucre y estudiaron juntos en la escuela. Que él se fue ya cuando era joven, hasta que regresó como en el 2000 – 2002 después de un accidente que lo dejó invalido. Que fue la señora Otilia Rodríguez quien lo recogió y se encargó de él y de sus gastos después de dicho accidente. Que cuando ya estaba muy enferma lo llevó para un asilo en Medellín, donde el Municipio le consiguió un cupo, pero con la condición de que ella debía asumir los gastos del demandante, porque los hermanos tampoco podían cuidarlo. Que sabe que era la señora Otilia quien asumía tales gastos, porque ella se lo contaba cuando debía viajar a Medellín. Que quien asumió los dineros del traslado a Medellín de don Pedro Pablo fue la señora Otilia. Que el actor vive actualmente en el asilo porque la señora Otilia Rodríguez falleció. Que nunca ha visitado al señor Pedro Pablo en Medellín. Que quien lo visita es la hermana Hermilda Araque Rodríguez, quien después de fallecida la señora Otilia es la que le ayuda con los gastos del asilo con la pensión que percibe.

La segunda por su parte, indicó que conoció hace más de 35 años a la señora Otilia Rodríguez en el municipio de Olaya Sucre porque fueron vecinas, y también conoce a la hija de doña Otilia, Hermilda Araque Rodríguez con quien trabajó en confecciones. Que también conoce al señor Pedro Pablo Araque Rodríguez porque él nació y se crio en el pueblo, hasta que un día ya adulto se perdió por mucho tiempo. Que la señora Otilia ya lo daba por muerto hasta que como en el 2002 les avisaron que estaba enfermo en un Municipio del Valle porque tuvo un accidente cerebral, y la hermana Hermilda fue por él y se lo llevó para el Municipio de Olaya a vivir con doña Otilia, quien lo cuidaba y le proporcionaba alimentación, techo y medicinas con lo que recibía de su pensión, porque ninguno de sus otros hijos le colaboraba. Que ella iba a Olaya cada 15 días y visitaba a doña Otilia y a Pedro Pablo y les llevaba cositas. Que ya cuando la señora Otilia se enfermó mucho se llevaron a Pedro Pablo para un asilo. Que doña Otilia lo visitaba por lo menos cada mes y cuando cobraba la pensión le mandaba para las vitaminas, ropa y medicamentos. Que a pesar de que en el asilo no se paga pensión o estadía, porque es una Fundación de la Alcaldía, Pedro Pablo si necesita medicinas, ropa, alimentos, gastos de acompañante en hospitalización y muchas cosas. Que al morir doña Otilia, Hermilda fue la que se quedó a cargo de Pedro Pablo, porque ya no tenían como sostenerlo. Que ella lo visita en el asilo y da fe que tiene una discapacidad muy grave, para comer, para caminar, para hablar y problemas de memoria. Que cuando Hermilda lo lleva al pueblo a descansar los vecinos lo visitan, le llevan cositas o lo pasean por el parque. Que actualmente Pedro Pablo es lúcido, pero por la gravedad de la enfermedad requiere de medicamentos y atención medica en hospitalización.

A juicio de la Sala, si bien las declarantes María Magdalena Muñoz de Rodríguez y María Herminia Parra de Piedrahita ciertamente describen con espontaneidad, credibilidad, claridad y coherencia las razones y ciencia de sus dichos, informando lo que les consta directamente frente a la dependencia económica del señor Pedro Pablo Araque Rodríguez respecto de su madre Otilia Rodríguez para la época de su muerte, lo cierto es que conforme a la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia referida en precedentes, dichas aseveraciones no resultan suficientes para establecer como lo define la

Corporación mencionada la dependencia económica del señor Pedro Pablo Araque Rodríguez respecto de la pensionada fallecida. Ello, por cuanto la Fundación Opción Colombia certificó que el actor se encuentra institucionalizado en dicha entidad desde el día 15 de abril de 2009, en el modelo de larga estancia. La deponente María Herminia Parra de Piedrahita adujo que en dicha Fundación no se paga pensión o estadía por el mencionado, porque es de la Alcaldía, pero que la causante cuando cobraba la pensión le mandaba para las vitaminas, ropa y medicamentos, sin que tal afirmación hubiese sido corroborada en este juicio y tampoco es un hecho que a la testimoniaste le constara de manera directa, y María Magdalena Muñoz de Rodríguez afirmó que el Municipio de Medellín le consiguió al accionante un cupo en la Fundación, pero con la condición de que la señora Otilia Rodríguez debía asumir los gastos de aquel y que sabe que era la causante quien asumía tales gastos porque ella se lo contaba cuando debía viajar a Medellín, tornándose para la Sala de Decisión en un testigo de oídas.

Se considera que con ocasión del fallecimiento de la señora Otilia Rodríguez el señor Pedro Pablo Araque Rodríguez no quedó en una situación de abandono o de necesidad de protección, y subordinado a los ingresos que su madre le pudiese proporcionar para solventar sus condiciones de subsistencia y para atender el estado de invalidez que padece, constituyendo dicha ayuda económica en imprescindible para asumir tales gastos, en la medida que como se indicó, el demandante se encuentra internado desde el 15 de abril de 2009 en la Fundación Opción Colombia en la modalidad de larga estancia, y en este juicio no se acreditó que el citado dependiera económicamente de su madre para el momento de su fallecimiento.

Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia que se revisa en apelación.

Las costas en ambas instancias corren en favor de Colpensiones y a cargo del demandante.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$908.526,00.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en apelación.

SEGUNDO: Las costas en ambas instancias corren en favor de Colpensiones y a cargo del demandante.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$908.526,00.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 73 de Abril 30 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL
GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL**

**SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-
ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12

Código de verificación:
be0e5675604342f4751a7e139800b7fcfa9d91e1bdf123f9a91ca600ee616845

Documento generado en 29/04/2021 10:25:23 AM